

OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO

ESTADO Y PARTIDOS EN MÉXICO

En México, más que en ningún otro país de América Latina, no puede hablarse de los partidos políticos sin hacer referencia al Estado. Ello obedece, principalmente, a la revolución de 1910 que, por su constitución política (1917) y por tradiciones incluso precoloniales, produjo un sistema estatal de peculiar fuerza en cuya cima se localiza lo que habría de ser la institución presidencial.

El Estado mexicano, aunque capitalista, fue, por lo menos hasta finales de los años treinta, factótum de la sociedad. La burocracia política postrevolucionaria que se apoderó del Estado, dio y quitó tanto justicia como privilegios para que las clases sociales, desarticuladas por la guerra civil, se reconstituyeran en menos de veinte años. La apariencia de ese Estado, confundido deliberadamente con gobierno, y más aún con poder ejecutivo, fue, como intenta serlo todavía, la de un Estado supraclasista, por encima de los intereses privados de la sociedad civil y, particularmente en el discurso, más que en los actos concretos (no siempre correspondientes con ese discurso), apoyado en los trabajadores, es decir en las mayorías —lo que no significa que se haya declarado contra el capital, aunque sí, a menudo, contra facciones de éste.

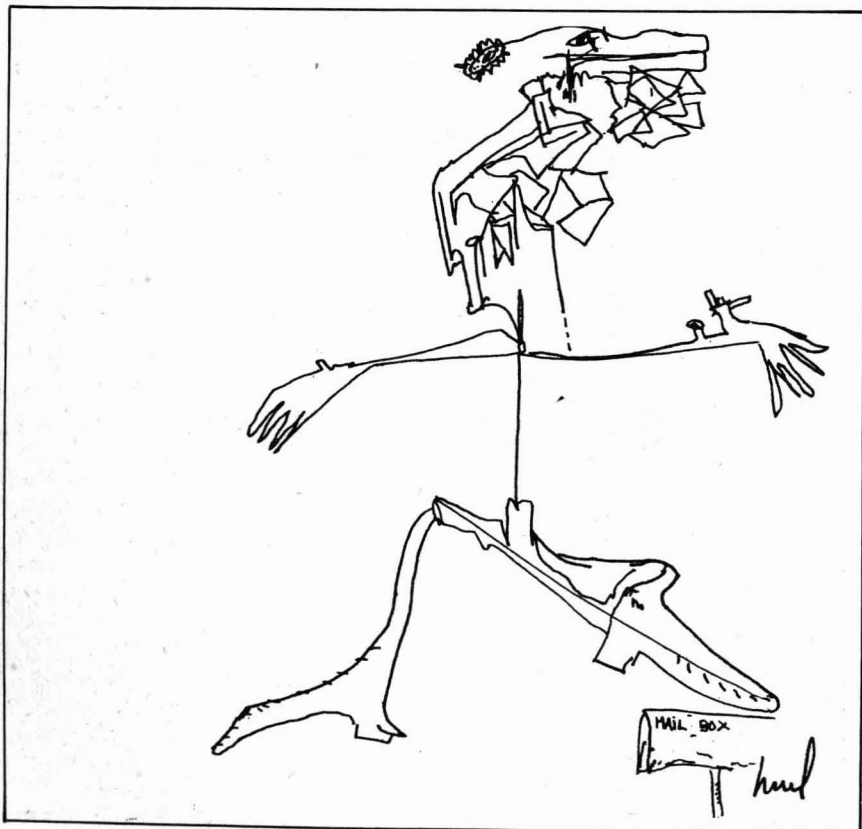
A la sombra del Estado, valga la figura, creció todo: la empresa, el sindicato, el partido político, y hasta la Iglesia, que había perdido prácticamente todo con las Leyes de Reforma en el siglo XIX. Pero a diferencia de las organizaciones de masas y

de los partidos políticos, que sólo recientemente de manera continuada han ido adquiriendo dinámica propia, poco a poco los grupos del capital y la Iglesia comenzaron a caminar por su propio pie, y frecuentemente contra el Estado, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, pero especialmente desde que ésta terminó.

Si se buscara una explicación para tal fenómeno, no resultaría descabellado afirmar que, en buena medida, ello se debió a una política estatal, producto también de la Revolución, consistente en un “te apoyo pero me apoyas” como proposición indiscutible, sin alternativa que no fuera la “de todos modos me apoyas, si no, te reprimo”. En términos menos llanos, se trataba de una política que fluctuaba entre el consenso y el control, cada vez más este último. Esto por cuanto a las mayorías. Porque las minorías propusieron muy pronto reglas de relación un tanto distintas.

La burguesía encontró, desde hace muchos años, que la apariencia del Estado mexicano era precisamente eso: apariencia. Esto es, que cuando exigía, casi siempre conseguía, aun a costa de los trabajadores, principal pilar de legitimidad por consenso del propio Estado. Mas una vez que la clase capitalista se autocomprendió como el motor, crecientemente poderoso, del llamado desarrollo mexicano, insustituible de acuerdo con las fuerzas existentes en el país y en buena parte gracias a los privilegios otorgados por el Estado, creció a tal extremo que ahora, como clase social, independientemente de sus pugnas internas, exige y subordina para su provecho la mayor parte de las políticas públicas, especialmente aquellas que tienen que ver con su reproducción. Fue la guerra mundial pasada la que impuso grandes modificaciones al modelo internacional de acumulación capitalista. Las innovaciones tecnológicas de la economía de guerra transformaron los sistemas de producción de los países industriales más avanzados. Las relaciones de éstos con los más desarrollados dependientes, como por ejemplo Brasil, Argentina y México, sufrieron, a su vez, cambios en términos del antiguo modelo imperialista de la explotación extensiva de materias primas y la venta de productos manufacturados. Con estas modificaciones, entre otras menos relevantes, se alteraría sustancialmente la dinámica posrevolucionaria de México. Con la terminación de la conflagración mundial, buena parte de la producción sustitutiva de México regresó, por así decirlo, a su país de origen, lo cual se tradujo en el inicio de los grandes endeudamientos al exterior, la apertura de nuestras fronteras a las inversiones directas e indirectas, el fin del populismo de otros momentos, la represión obrera, el cese al reparto de tierras, el apoyo a la industria y el deterioro del nacionalismo, que no fuera verbal.

Por las modificaciones del modelo de acumulación a escala mundial, en México se impuso el de la industrialización pensada como panacea para salir





del subdesarrollo, sin que se advirtiera que con tal enmienda se acentuaría la dependencia y la subordinación económica al capitalismo internacional, representado en ese tiempo por la potencia hegemónica de Estados Unidos.

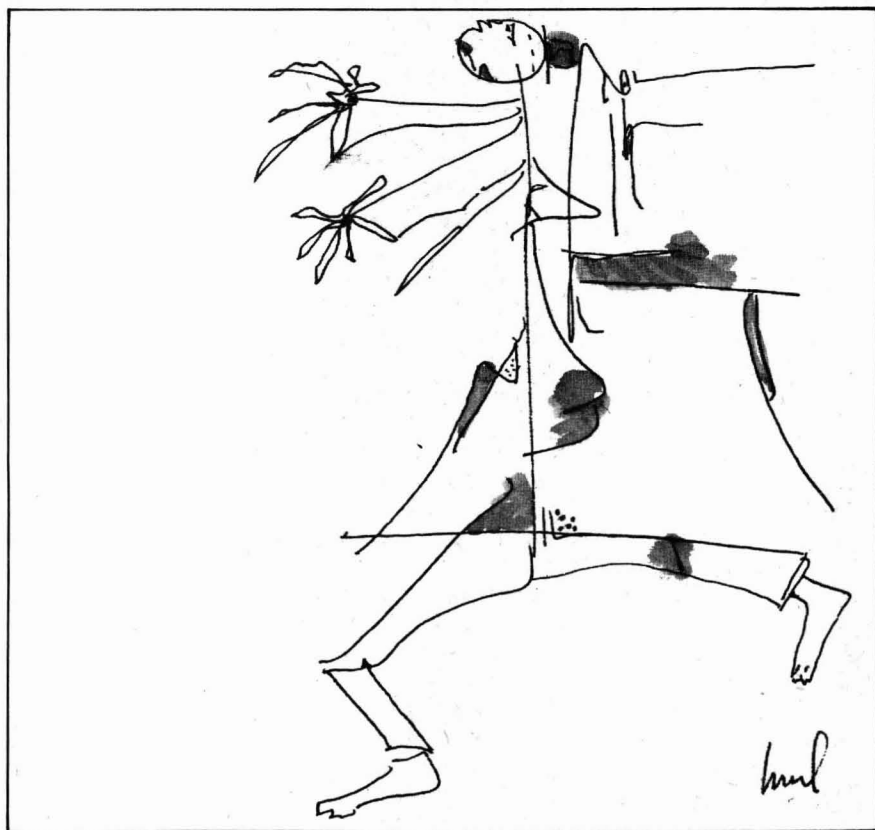
La coyuntura favoreció la emergencia de una burguesía interna proclive a asociaciones con el capital internacional y de una burguesía media, de tendencias nacionalistas pero exigente de un trato paternalista por parte del Estado. La fuerza de éste comenzó a periclitarse en el ámbito de la economía; y de rector de ésta se convirtió paulatinamente en el apoyo más importante de la acumulación privada de capital, no sólo nacional sino también extranjero. Sólo en la esfera de las expresiones políticas el Estado mexicano mantuvo el control, aunque bajo un esquema distinto al de la etapa interguerras: la represión, incluso anticomunista, se hizo presente como común denominador. El gobierno, con el partido estatal (Revolucionario Institucional — PRI), con las organizaciones obreras y campesinas controladas por éste, usó incluso la fuerza para sofocar todo intento de autonomía de clase y, paralelamente, modificando por primera vez desde 1918 la ley electoral, propició el registro de partidos considerados extremos, de izquierda y de derecha, con dos propósitos bastante claros: uno, dar la imagen de un sistema político plural que restituyera parte del consenso perdido por su política económica, y dos, presentar opciones político-

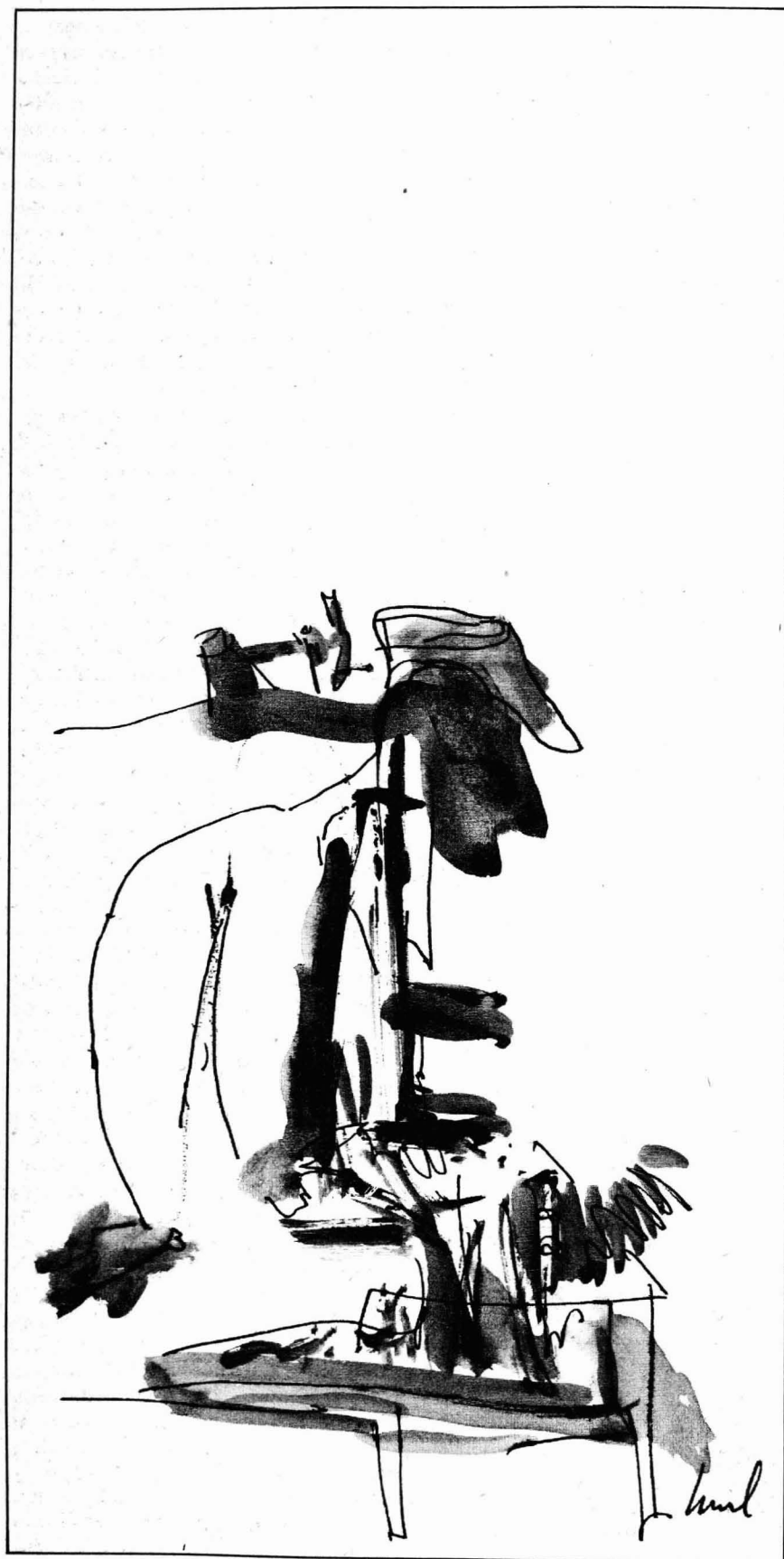
electorales a los sectores de masas inconformes que escapaban o tendían a escapar del control corporativo del PRI.

Fue registrado coyunturalmente el Partido Comunista Mexicano. Pero como contraparte se auspició desde las esferas del poder público el surgimiento de otro partido más reformista que el primero. Fue el Partido Popular, desde 1960 Popular Socialista. Una vez constituido éste, se reformó de nuevo la ley electoral y el PCM, junto con la ultra derecha, representada por el Partido Fuerza Popular, perdió su registro en 1949.

Mas si la fuerza del Estado se deterioraba a escala económica frente al vigor adquirido por la burguesía, en la esfera política no las tenía todas consigo. Sufrió graves escisiones en el seno de lo que el expresidente Calles llamara la “familia revolucionaria”, es decir en el interior de la burocracia política. La más relevante de esas escisiones fue la que se tradujo en un nuevo partido, la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, que en 1952 presentó la más grande oposición al partido estatal desde su fundación. Tal hecho, tan insólito como insostenible desde el punto de vista de la burocracia política, motivó una nueva reforma a la ley electoral de tal manera que legalizar un partido resultara cuantitativamente casi imposible. A partir de ese momento, hasta 1976, el sistema de partidos en México sería el mismo: tres partidos de muy débil oposición —el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Popular Socialista (PPS) y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y el PRI con todos los recursos del gobierno y con el control casi absoluto de las organizaciones de masas del país.

En correspondencia al auge del capitalismo mundial, la economía mexicana sostuvo una tasa de crecimiento suficientemente alta como para garantizar un relativo bienestar para los sectores obreros de las principales empresas y para las capas medias, sobre todo urbanas. Pero crecimiento, al fin y al cabo, no significó nunca distribución de la riqueza y muy pronto las condiciones de los sectores menos favorecidos hicieron crisis, particularmente en el medio rural. La oposición ilegal proliferó en el campo y se conocieron luchas armadas de tipo guerrillero en diferentes puntos del país. Asimismo, grupos urbanos fuera del control gubernamental, principalmente intelectuales radicalizados, influyeron en las universidades de donde surgieron movimientos estudiantiles que cuestionaban las formas políticas hegemónicas y las desigualdades cada vez más visibles de la sociedad. Los partidos institucionalizados —PRI y oposición legal— no representaban opción para la inconformidad y para la oposición real más consciente del país. Otras organizaciones políticas, incluyendo el PCM, significaban muy poco o nada como alternativa del poder instituido; de hecho, sobre todo la izquierda, se encontraba en aguda crisis de atomización. Los aparatos políticos del Estado mexica-





no demostraban anquilosamiento e incapacidad de adaptación a las demandas planteadas. El movimiento estudiantil—popular de 1968 tuvo la oportunidad histórica de demostrarlo. No es casual que en ese año se iniciara un nuevo proceso en la vida política del país.

Si las condiciones de la economía mundial aconsejaban políticas de austeridad, en México ello no era posible so pena de exacerbar los ánimos aplacados brutalmente en octubre del 68. La mejor opción para mantener la estabilidad que interesaba tanto al Estado como a la clase dominante, era recurrir al uso de paliativos políticos tales como la ampliación del sufragio y la asunción estatal de las prestaciones sociales que complementaban el deterioro salarial que el capital no estaba dispuesto a evitar. Por un lado se recurrió al endeudamiento externo en incrementos alarmantes y por el otro a una flexibilidad política sólo comparable a la de los tiempos del cardenismo, cuando el populismo era fórmula común en los países más desarrollados de la región latinoamericana.

El movimiento obrero organizado bajo el control del Estado sufrió nuevas y promisorias divisiones de tendencia democrática. En las zonas rurales de mayor pobreza proliferaron las invasiones campesinas de tierras ante la relativa indiferencia de los gobiernos federales y estatales, salvo en aquellos sitios donde la burguesía agro-exportadora, con grandes recursos tecnológicos y de riego, había sentado sus reales. Los grupos políticos de izquierda, reanimados por la excarcelación de sus dirigentes y por el despertar beligerante de importantes sindicatos de industria —principalmente electricistas—, intentaron de inmediato formar partidos políticos, y en el caso de los comunistas, fortalecer su partido para convertirlo en una organización de masas con renovadas proposiciones, más radicales que nunca desde los tiempos de los frentes populares.

La política llevada a cabo por el Estado tuvo graves repercusiones. Se incrementó la dependencia del país, se favoreció al gran capital, internacional en su mayor parte; se mantuvo artificialmente el valor de cambio de la moneda mexicana respecto al dólar; la balanza comercial se inclinó negativamente todavía más; el presupuesto gubernamental llegó a su punto más alto de déficit; el desempleo cobró magnitudes alarmantes y progresivas y los efectos de la crisis del capitalismo mundial de los años 1974-1975 encontraron campo propicio para extenderse.

En 1976, año de la última sucesión presidencial, la economía mexicana enfrentó problemas muy agudos pese a los esfuerzos del Estado. La crisis no pudo ser disimulada por más tiempo, la moneda fue devaluada para favorecer las exportaciones; los sindicatos y las asociaciones campesinas de tendencias autónomas conocieron de nuevo la represión; las universidades más críticas volvieron a ser agredidas; la prensa más o menos independiente



fue censurada incluso por la fuerza. Sólo quedaron los partidos, sin apoyo de masas, desprestigiados, símbolos de la obsolescencia política que el régimen no pudo remontar en un periodo de gobierno pese a una reforma más a la ley electoral, en 1973.

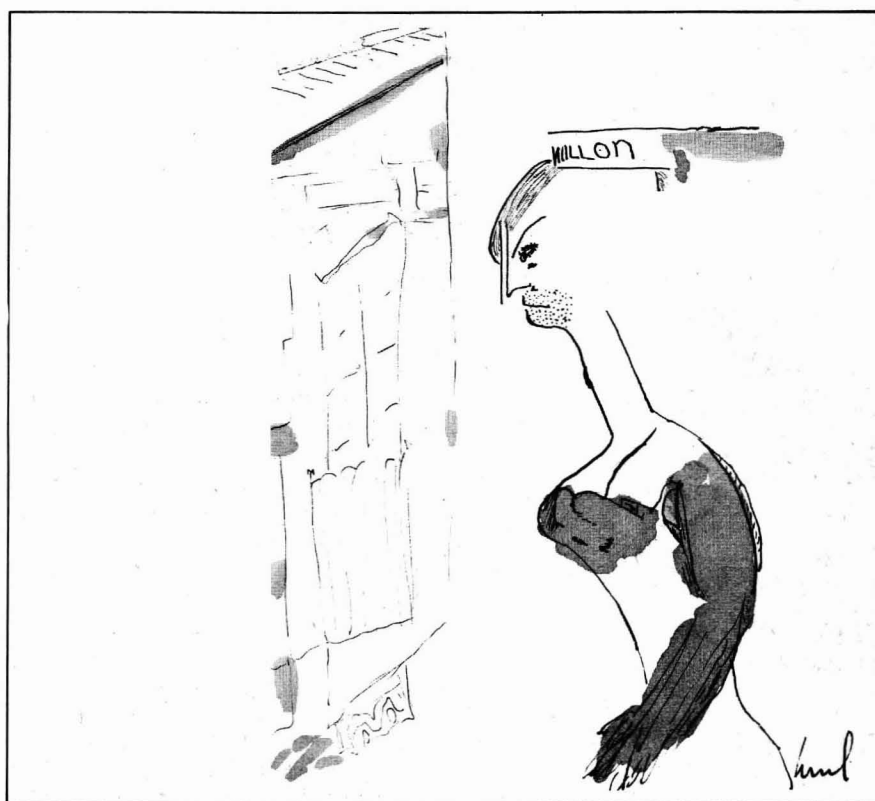
El Estado mexicano parecía haber perdido legitimidad ante la sociedad civil. Los resultados electorales demostraban un incremento alarmante de la abstención, estancamiento de votos en favor de la oposición legal y disminución de sufragios por el PRI. Se habló de dictadura, de fascismo incluso y de la alternativa de tipo socialdemócrata como contraparte tanto del fascismo como del socialismo. Los centros de decisión internacional, de manera señalada la Comisión Trilateral, auspiciaban indistintamente dictaduras de gobiernos socialdemócratas en América Latina, para garantizar sus intereses amenazados por las consecuencias de la crisis en las masas crecientemente inconformes de su situación, como lo demuestra ahora y desde hace un tiempo, la lucha heroica de los pueblos centroamericanos.

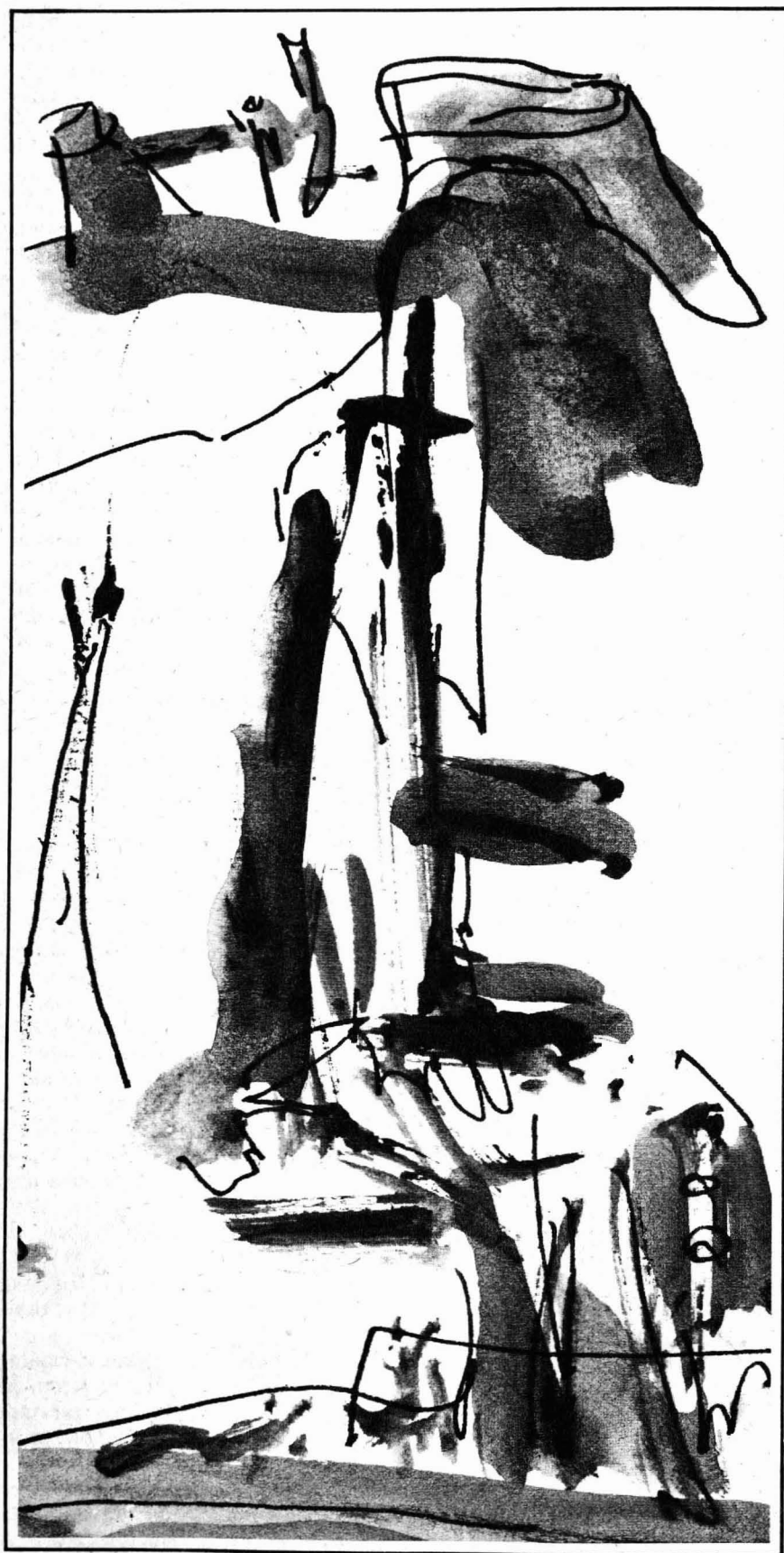
El gobierno de México, en apego a una larga tradición pragmática, optó por la democracia controlada desde su planteamiento, al proponer como suya una demanda imposterizable del proletariado: la reforma política. La iniciativa de ésta tuvo el propósito de ensanchar la representación política en niveles restringidos (como la Cámara de Diputados, en primera instancia) y de lograr la participación política exclusivamente electoral. Para ello

era menester presentar nuevas opciones partidarias y obtuvieron registro sin mayor trámite tres nuevos partidos: el Comunista, el Demócrata Mexicano (PDM) de la tradicional ultra derecha representada por los sinarquistas, y el Socialista de los Trabajadores (PST) de posiciones eclécticas cercanas al socialismo reformista pro gubernamental. Paralelamente, se aplicó una política económica y laboral denominada "alianza para la producción" que significaba, en síntesis, austeridad en el gasto público, inversión y creación de fuentes de trabajo por lo que respecta al capital, aumento de la productividad y limitación de las demandas salariales; es decir, la aplicación, con matices, de la política del Fondo Monetario Internacional.

Ante esta situación, los partidos políticos habrían de definirse por sus posiciones respecto de la dinámica y la caracterización del capitalismo y respecto del papel que juega el Estado mexicano. Unos de los partidos representan los intereses dominantes, otros se autodefinen como socialistas y, supuestamente, contrarios al capitalismo como sistema prevaleciente. De despejar ambos conjuntos de partidos se trata ahora. Para los del primer conjunto el capitalismo es injusto pero puede corregirse con los propios recursos que el sistema permite u otorga. Una de las calamidades que el sistema mexicano soporta es el imperialismo, el cual, cuando es aceptada su existencia como tal, suele ser concebido como algo externo, como una amenaza foránea que descansa en el poder de los grandes monopolios capitalistas. En este sentido, este conjunto de partidos se divide a su vez en dos subconjuntos. El primero formado por Acción Nacional, el Demócrata Mexicano y el Auténtico de la Revolución Mexicana; el segundo, por el Revolucionario Institucional, el Popular Socialista y el Socialista de los Trabajadores. Los primeros ven en el gran capital el obstáculo principal para que las condiciones de México sean menos injustas, y en general no aceptan la categoría "imperialismo". Los segundos sí aceptan a éste como categoría y lo consideran el enemigo principal de los trabajadores y del país. De aquí, este subconjunto de partidos (PRI, PPS y PST), propone la unidad nacional de todas las clases, el apoyo de los trabajadores a las fuerzas que ellos denominan democráticas y nacionalistas dentro del gobierno y la expansión de la influencia del Estado en la vida social y económica del país. Ambos subconjuntos de partidos coinciden en acusar al gran capital como un enemigo a debilitar y, en su caso, derrotar.

Para el segundo conjunto de partidos el capitalismo es sinónimo de injusticia, de explotación, de desigualdad que sólo podrá suprimirse transformando el sistema de raíz, sustituyéndolo por otro, el socialismo. Aunque las posiciones de estos partidos no son muy precisas respecto del capitalismo, en términos generales califican al imperialismo como una fase del sistema y no como un factor ex-





terno a la realidad del país. Si bien es cierto que los partidos de este conjunto ponen el énfasis de sus proposiciones de lucha en el antimperialismo, sus postulados universales son principalmente en contra del capitalismo. Este conjunto de partidos está constituido por el Comunista Mexicano, el Socialista Revolucionario, el del Pueblo Mexicano y por el Movimiento de Acción y Unidad Socialista. También deberían ser incluidos el Partido Mexicano de los Trabajadores y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, pero éstos se distinguen de los anteriores en que enfáticamente no diferencian el imperialismo del capitalismo ni la lucha contra el gran capital de la que debe darse contra el capital. Estas aparentes sutilezas son muy importantes en la definición de los partidos de izquierda socialista.

Asimismo, respecto de la caracterización que los partidos hacen del Estado, hay diferencias. Para los del primer conjunto, el Estado es la panacea, sólo a través de él, con el solo expediente de mejorar o cambiar a las personas que le dan vida en su acción, se podrían modificar las condiciones de desigualdad y de injusticia que privan en el país. Su proposición, cuando viene al caso, es que los sectores mayoritarios del país (trabajadores y pequeños empresarios) se alíen con los mismos democráticos, nacionalistas y no corruptos (una de las proposiciones del PAN) del gobierno. En este sentido la reforma política será útil para que en los órganos de representación popular se ejerza la presión conveniente para que tanto la política económica como la legislación favorezcan a las mayorías en contra de los intereses imperiales y de los que internamente se han evidenciado como antinacionalistas y mezquinos en exceso.

Para los del segundo conjunto, en cambio, el Estado representa los intereses minoritarios de la sociedad mexicana, es decir los del gran capital. Por tal razón, entre otras, hay que modificar la estructura y la composición del Estado para convertirlo en otro de tipo diferente, un Estado socialista. No es muy clara la estrategia que se debe seguir, y en ocasiones, sobre todo por los planteamientos del PCM, PSR, PPM y MAUS, se perciben intentos de alianza con sectores de otras clases sociales distintas a los trabajadores con el objeto de modificar la composición, pero especialmente, la orientación de la política económica del Estado.

Así, aun en los planteamientos de los partidos de izquierda, el Estado ocupa un papel central no suficientemente clarificado. Lo más común es que se le conciba como si todavía fuera aquella entidad de los tiempos anteriores a la Segunda Guerra Mundial o, en el mejor de los casos, como si, a pesar de las características del capitalismo actual, pudiera ser reconvertido en un Estado fuerte, rector de la economía y de la sociedad al grado de poder modificar, por voluntad política, el rumbo de éstas y hacer del país un México soberano, independiente, desarrollado y menos desigual.